LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA Y SUS RETOS

Francisco Miró Quesada Rada Docente Principal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM.

SUMARIO: I.- Planteamiento del problema. 2.- ¿Cómo afrontar el reto?

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para explicar cuáles son los retos de la democracia en América Latina y relacionarlos con la gobernanza, no sólo en este Continente, sino a nivel mundial, es necesario referirnos al denominado «proceso democratizador en la región».

A partir de los años 80 América Latina ingresó a lo que Samuel Huntington denominó la «Tercera Ola democratizadora», un fenómeno político relacionado con la mundialización y con el auge del neoliberalismo.

Hay hitos importantes que mencionamos por su impacto internacional:

- 1.- La caída de la dictadura uruguaya en un referéndum convocado por la junta militar. La consulta consistió en someter al pueblo charrúa una nueva Constitución con la intención de cambiar la Constitución vigente de 1966 que es presidencialista. Triunfó el voto negativo, situación que determinó se mantuviera la Constitución de aquel año. Este hecho motivó el retiro de las Fuerzas Armadas que, desde el «Coupe de Palais» dado por Bordaberry en 1972, tenían el control del poder. Esta modalidad de un presidente elegido, que da un golpe desde Palacio instaurando una dictadura cívico-militar, se reproduciría en el Perú a partir de 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori. En ambos casos la justificación del golpe fue la lucha contra el terrorismo.
- 2.- En Chile, también fue derrotada la dictadura de Augusto Pinochet en un referéndum convocado por el dictador chileno para perpetuarse en el poder. El autócrata militar no tuvo otra alternativa que renunciar.

A partir de este hecho las fuerzas democráticas chilenas, que constituyeron una convergencia, iniciaron un proceso democratizador que a la fecha sirvió para consolidar la democracia en este país.

Tanto Chile y Uruguay tienen ahora democracias sólidas y estables lo que ha permitido su consolidación en el marco del Estado de Derecho y de las reglas de juego que deben existir en todo sistema democrático.

3.- El tercer caso es el mexicano, el último país que recibió el impacto de la ola democratizadora, que derrumbó una dictadura de partido hegemónico con una duración de 70 años.

Por supuesto que en este contexto existieron otros casos importantes como el argentino, brasileño, guatemalteco. Cabe resaltar la caída de dictaduras tradicionales en la República Dominicana, Nicaragua y Paraguay, lo que no sucedió en Colombia y Venezuela que a finales de la década de los 50 y comienzos de los 60 lograron un sistema democrático estable. Colombia con su histórico modelo bipartidista, liberal-conservador. Venezuela por el pacto denominado de «punto fijo».

Pero si estos son los hechos la pregunta es ¿cuáles fueron las razones para que estos hechos se produzcan? Podemos mencionar entre diversos factores los siguiente:

1.- El agotamiento del modelo nacionalista populista en los casos de las dictaduras militares de izquierda como sucedió en el Perú, Bolivia, Panamá y con el sandinismo nicaragüense.

- El agotamiento del modelo militar conservador de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, Honduras, El Salvador y Paraguay.
- 3.- Una percepción, en la mayoría de los pueblos latinoamericanos, que a través de la democracia se podía afrontar y superar problemas estructurales como el de la pobreza, la corrupción, la escasa y débil institucionalidad, el abuso de poder, la marginación y exclusión social.

La democracia había nuevamente recuperado prestigio en la opinión pública latinoamericana, creencia que se reforzó a raíz de acontecimientos previos como la caída de las largas dictaduras en las naciones europeas mediterráneas: España, Portugal y Grecia, así como el casi paralelo proceso posterior a la democratización en América Latina, como fueron los cambios que acontecieron en las ex Unión Soviética, la ex Alemania Oriental, cuyo símbolo emblemático fue la demolición del muro de Berlín y los sucesivos cambios en los países de Europa Central que habían estado bajo la influencia soviética.

Pero más allá de este proceso que fue prácticamente universal se han intentado dar algunas explicaciones de sus causas en el contexto mundial y en el caso específico de América Latina. Una de ellas consiste en saber si los pueblos latinoamericanos han superado la cultura autoritaria dominante heredada de la colonia. También si se ha podido superar otro factor de cultura política como el caudillismo y el clientelismo y, finalmente, si se ha puesto término al famoso «péndulo del poder», que consiste en un cambio constante de gobiernos militares y civiles y viceversa. Fenómeno político que es una de las razones de las frecuentes crisis de gobernabilidad que han existido y que existen en la región.

Podemos afirmar que debido al proceso democratizador algunos de estos elementos han sido superados, pero solo en parte, porque el desarrollo de la democracia en la región ha sido desigual. La cultura autoritaria, el caudillismo y el clientelismo siguen arraigados en tres países andinos: el Perú, Bolivia y Ecuador, pero también en Guatemala, Nicaragua y Honduras. El único país de la región andina que ha superado estos tres elementos es Colombia. También ha sido superado en Chile, Uruguay y hace más de 50 años en Costa Rica. Se mantienen algunos de estos elementos, el caudllismo y el clientelismo, en el Brasil, en Paraguay y la Argentina para citar tres casos de países que integran el denominado organismo subregional Mercosur y han resurgido en Venezuela con el gobierno de Chávez.

En cuanto al «péndulo del poder» la tendencia es que, al menos no hay indicadores que se restablezcan dictaduras militares clásicas pero si han aparecido gobiernos de origen democrático con un ejercicio autoritario del poder.

Un caso fue la dictadura fujimorista que rompió con el proceso democratizador de la región. En realidad el fujimorismo fue una autocracia revestida de formalidades democráticas, en donde el poder se ejerció controlando importantes instituciones del Estado. La dictadura de Fujimori fue en lo económico neoliberal y en lo político populista. Esta modalidad de una autocracia revestida de formalidades democráticas la encontramos a la fecha principalmente en el gobierno de Chávez, que si bien aplica métodos de control político similares a los de Fujimori, se diferencia de éste por su propuesta de izquierda de corte nacionalista populista y el hecho de que la concentración del poder en Venezuela no se produce por un golpe desde Palacio, sino por un proceso de usurpación gradual del poder a los otros poderes públicos, situación que, por un lado bloquea y por el otro debilita la democracia.

Explica el intelectual y académico brasileño Theotonio dos Santos en su obra «Del Terror a la Esperanza. Auge y Decadencia del neoliberalismo», que «el proceso democratizador fue apoyado por los gobiernos norteamericanos desde la administración Carter, pero que igualmente la social democracia europea se orientó en la misma dirección con miras a generar una onda liberal en los países del tercer mundo» (pág. 385).

Este proceso, que como se ha descrito se desarrolló a lo largo de los años 80 y 90, cuando culmina, sirve, aunque no en todos los casos, para establecer la ideología neoliberal, «posteriormente expresada en el consenso de Washington que unió a los gobiernos norteamericano y británico en una perspectiva conservadora, en el sentido de imponer políticas de ajuste estructural en los países subdesarrollados, ejecutadas bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En los años 80 quedó claro el efecto del «proceso democratizador» global conducido por partidos liberales y conservadores, que instauraron un escenario totalmente diferente», explica dos Santos (pág. 386).

Estas palabras de dos Santos dan la impresión que el proceso democratizador en América Latina, Europa Central y Africa, fue impuesto por intereses de grupo de poder capitalistas norteamericanos y británicos, y también porque el Estado norteamericano, defensor de dichos intereses, cambió su estrategia respecto a la que tenía con anterioridad, como fue apoyar a las dictaduras militares afines a su estrategia político-económica en el Continente. Pero resulta que paralelamente surgieron dictaduras de signo ideológico nacionalista-populista de izquierda que incomodaba los intereses norteamericanos en la región y se acercaban al bloque socialista, que si bien ya había entrado en crisis, no se avizoraba la hecatombe posterior. Este hecho es parcialmente cierto porque no toda democracia fue impuesta de arriba hacia abajo. El mismo dos Santos reconoce esta situación cuando señala, «no es cierto que estos

cambios democráticos siempre se dan de «arriba hacia abajo». Sudafrica, Brasil, Filipinas, Nicaragua, Rusia en parte, Polonia y otros procesos de democratización contaron con un fuerte apoyo popular» (pág.386).

Estos movimientos democráticos con respaldo popular, se mantuvieron dentro de un entorno conservador en lo político y neoliberal en lo económico. La vía autoritaria hacia la hegemonía del capital se había agotado, por lo tanto se tenía que buscar otro camino y este fue el democrático. Para Theotonio dos Santos, «en términos generales, las fuerzas conservadoras nacionalistas han mostrado en los países subdesarrollados una creciente y peligrosa tendencia a aceptar la globalización y los principios neoliberales. Los social demócratas y los socialistas pareçen adaptarse mejor que los partidos conservadores y los viejos nacionalismos a la integración global y liberal» (pág. 387).

Ello sucede en los casos de Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, Panamá y Costa Rica pero no en Paraguay, Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y México, cuyas políticas económicas han descuidado lo social privilegiando el proyecto neoliberal del consenso de Washington.

En el Caribe, al margen de Cuba que mantiene un sistema socialista tradicional de partido único, Jamaica con su sistema parlamentario está en la misma línea social demócrata. Haiti, a raíz del golpe de estado contra Aristide y el ascenso al poder de Preval, continúa con una fuerte crisis producto de conflictos ideológicos y políticos, que se debate entre tendencias neoliberales, socialistas y autoritarias, y la República Dominicana con un gobierno social demócrata que navega bajo el impacto de políticas neoliberales.

En la otra orilla están los recientes gobiernos nacionalistas-populistas de izquierda como en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que bajo esta orientación político-ideológica, buscan una nueva opción contra el «imperalismo capitalista y neoliberal», en constante enfrentamiento. Bajo la fuerte influencia del gobierno de Chávez estos gobiernos han constituido el Alba «Alternativa Bolivariana para las Américas», como bloque alternativo al modelo neoliberal proponiendo lo que Chávez denomina «el socialismo del siglo XXI».

Desde la perspectiva de la sociedad civil, diversos estudios y encuestas serias como la del latinobarómetro, demuestran tendencias en la ciudadanía para apoyar discursos, gobiernos y lideres con actitudes y mensajes autoritarios. Por ejemplo en el Perú, durante las elecciones del 2006, el candidato Ollanta Humala ganó la primera vuelta y logró en la segunda vuelta un 45% de aprobación. Ha resurgido el discurso autori-

tario en el marco de la democracia y con relativo éxito. Este discurso está vinculado a propuestas reinvidicativas de grupos marginados, no sólo indigenas sino también urbanos y es una respuesta a los desajustes estructurales acontecidos debido a la aplicación del consenso de Washington y a las recetas económicas impuestas por los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional y del Banco mundial, cuyos resultados arrojan un crecimiento económico importante pero insuficiente que está agudizando los conflictos entre quienes han mejorado económica y socialmente y entre quienes se encuentran excluidos y no se han visto beneficiados con el crecimiento económico.

La razón principal de esta contradicción es que no se ha podido superar la brecha existente entre la riqueza y la pobreza, pues como se sabe, América Latina, un Continente que crece 5% en los últimos años es aquel en donde es más marcada la diferencia entre pobres y ricos. Diferencia que es uno de los factores de crisis políticas en los países en donde es mayor la pobreza y tiene una débil institucionalidad, económica y política. «Se trata de repúblicas heridas por la desigualdad. En este siglo, el 10% de los latinoamericanos más ricos son dueños del 34% y el 47% de todo, mientras que al 20% de los más pobres les toca entre el 2% y el 5%, dependiendo de los países. Democracias saludables no desarrollan en dicho contexto», dice Virgilio Levaggi representante para el Perú de la OIT (diario El Comercio, sección Opinión, pág. 4,2008). De igual parecer es Tomás Eloy Martínez, Director del Departamento de Estudios latinoamericanos de la Universidad de Rutgers y novelista argentino quien comenta una obra sobre América Latina del periodista británico Michael Reid «es el área de más desigual distribución de las riquezas. A la vuelta del siglo XXI el 10% de los más ricos, eran dueños de entre el 34% y 47% de todo, dependiendo del país, mientras que al 20% de los más pobres les toca solo de un 2% a un 5% así hasta las democracias saludables explotan y se corrompen» (El Comercio sección Mundo pág. 4-2008).

En términos generales, salvo casos específicos, no se puede hablar de una América Latina social, como se habla de una Europa social, porque América Latina sigue siendo un Continente de baja integración social, de escasa institucionalidad política pero con una alta demanda para superar esta situación. A la demanda de salir de la pobreza, se le debe agregar la demanda de una mayor participación popular en el proceso de toma de decisiones políticas, pero como ambas demandas no tienen un correlato que permita una aplicación efectiva y coherente, desde las esferas de los gobiernos en donde se toman decisiones, la mayoría de las sociedades latinoamericanas han quedado desarticuladas y ciertas regiones estancadas en su desarrollo económico y construcción de la democracia. Es como si existieran dos abismos y no se ha podido construir el puente que permita un intercambio fluido entre los intereses culturales, políticos y económicos de pueblos que tienen visiones distintas, como son la cosmovisión andina y la occidental. Esta situación nos conduce a replantear la visión

social de nuestro Continente y asumirlo como un conjunto de sociedades pluriétnicas, pluriculturales y plurilingüísticas. Y es que en América Latina existe una extraordinaria sociodiversidad pero que no ha sido plenamente comprendida y asumida. Esta situación es una de las principales razones de la baja integración social y de los consecuentes conflictos que se producen.

Las democracias latinoamericanas se encuentran frente a una realidad conflictiva que estalla permanentemente y su principal reto es cambiar esta situación pero con políticas democráticas inclusivas, transparentes y participativas, que contribuyan a terminar con la cultura autoritaria, el clientelismo y el caudillismo, situación que a pesar de los esfuerzos que se realizan por superarla persisten, en parte, porque nuestras democracias son de elite, debido a que el sistema es de baja integración social.

2.- ¿CÓMO AFRONTAR EL RETO?

En una reunión que tuve con el politólogo norteamericano David Scott Palmer, un conocedor del Perú y sobretodo de la región andina, me informó que un grupo de politólogos de Harvard habían realizado un estudio en donde se sostenía que a comienzos del siglo XXI iban a producirse conflictos políticos en la región andina. Esta predicción, planteada en 1998, se ha cumplido en gran parte. Los pueblos de la región andina, incluso a finales de los 90, empezaron a cuestionar a los gobiernos y al modelo económico neoliberal, más en unos países que en otros, produciéndose fuertes crisis políticas que concluyeron con la caída de estos gobiernos pero no por golpes de Estado sino por constantes rebeliones populares. El «Coupe d'état» y el «Coupe de Palais» fue reemplazado por una nueva modalidad que denominamos «Coupe de Peuple». Estos movimientos de protesta popular que se manifestaron en Ecuador, recordemos la caída de Bucaram y Mahuat, en Bolivia como sucedió en el gobierno de Sánchez de Lozada, y en Brasil con Color de Mello expresaron el descontento con la élite política y con el modelo económico neoliberal. Posteriormente a los casos ecuatoriano, boliviano y brasileño, un movimiento de protesta popular en la Argentina, logró que el presidente De La Rua renunciara al poder. Lo interesante de estos movimientos consistió en que no cuestionaban la democracia en si misma, sino a los gobiernos que, si bien habían sido elegidos democráticamente, no supieron resolver un conjunto de demandas. Por eso al caer esos gobiernos los presidentes fueron reemplazados por los vice presidentes o por gobiernos de transición.

Cabe recordar que por esta época Hugo Chávez encabezó un golpe de estado abortado contra Carlos Andrés Pérez. En el Perú, entre 1999 y el 2000, aunque fue un levantamiento popular contra una dictadura denominado de los Cuatro Suyos, se produjo la caída de la cleptocracia fujimorista. Como se ha señalado el fujimorismo fue un

proyecto neoliberal autoritario que desplazó al proyecto neoliberal democrático, una propuesta que fue encabezada y sostenida por el famoso escritor Mario Vargas Llosa. Al respecto comenta Francisco Durand en su obra «Riqueza Económica y Pobreza Política», que durante el fujimorismo se produjo «un reacomodo de fuerzas en donde los poderes fácticos buscaban relacionarse inmediatamente con el nuevo gobernante. Se forma entonces una mesa de poder en la cual se colocan las patas que le darán solidez por un decenio: fuerzas armadas, poderes fácticos externos, gran parte del empresariado, además de sectores conservadores de la Iglesia Católica» (pág. 314). La dictadura cleptocrática, como bien afirma Durand, fue constituida por tres mafias. La mafia blanca encabezada por el empresario Jorge Camet quien fuera Ministro de Economía. La mafia amarilla liderada por el mismo Fujimori, y la mafia verde, conducida por Vladimiro Montesinos. Cada una de estas mafias tuvieron sus asientos institucionales y sus redes de corrupción.

El fujimorismo fue un modelo típicamente peruano, que trató de ser imitado en Guatemala por el presidente Serrano, pero fracasó por un levantamiento popular que instauró un gobierno de transición que instauró un gobierno de transición conducido por el defensor del pueblo guatemalteco. Se diferencia de la actual tendencia nacionalista-populista por el carácter ilegítimo de su gobierno pero se asemeja, al menos con el gobierno de Chávez, por su naturaleza usurpatoria de los poderes institucionales de la democracia representativa poniéndolos a su servicio. Sin duda, como hemos indicado, la metodología de Chávez es similar a la de Fujimori más allá de las claras diferencias ideológicas. En el trasfondo de todos estos hechos estaba la cimiente de lo que a la postre sería el resurgimiento de un discurso y una práctica populista.

En su estudio «Percepciones sobre la Democracia y Desarrollo político en América Latina», el politólogo alemán Dieter Nohlen, señala a partir de los datos señalados en el latinobarometro, que en la mayoría de los países latinoamericanos existe «satisfacción baja con la democracia, valores bajos de confianza en las instituciones, priorización del desarrollo sobre la democracia. Esas opiniones y creencias son el caldo de cultivo para populistas y movimientos populistas, y por lo demás, para una erosión del concepto de democracia y su correspondiente institucionalidad». (pág. 155).

Esta tendencia hacia el populismo, cargada con una fuerte dosis de nacionalismo y la puesta del electorado hacia discursos centro izquierdistas se manifestarán en las diversas elecciones del 2006 que se realizaron en varios países de la región. Con anterioridad a este fenómeno Hugo Chávez había ganado las elecciones en Venezuela. Posteriormente líderes populistas nacionalistas como Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y Ortega en Nicaragua fueron elegidos. La tendencia también se manifestó con la candidatura de Humala en el Perú y de López Orador en México, que fueron

derrotados por escaso margen, y en el caso mexicano, quedaron dudas sobre la transparencia del proceso electoral.

Estos movimientos populistas y nacionalistas al ser elegidos por sus pueblos son legítimos en cuanto a su origen, pero se advierte, como se ha explicado actitudes autoritarias en cuanto al ejercicio del poder. Por supuesto el ejercicio del poder tiene en estos casos diversos matices.

La importancia del origen democrático en estos gobiernos merece un análisis especial. Hugo Chávez fue depuesto por un Golpe de Estado, que duró poco por presión de la OEA y en particular por los Estados Unidos que exigieron y presionaron a los golpistas para que se retiraran del poder. Por primera vez se había aplicado la Carta Democrática Interamericana.

Es un hecho que los pueblos de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua se decidieron por una opción alternativa de gobiernos que implementaron las recetas del consenso de Washington. En otros países los pueblos optaron por discursos socialistas democráticos, como en Brasil, Argentina, Uruguay y Costa Rica. Sólo en Colombia se mantuvo una opción conservadora con la reelección de Uribe y en el Perú la elección de Alan García se debió a la fuerte campaña que los medios de comunicación ejercieron contra Humala. El APRA de orientación política centroizquierdista, ahora implementa una política económica neoliberal similar a la colombiana. Chile continúo con su tendencia centroizquierdista a través de la elección de los candidatos de la convergencia, tendencia que se expresó nuevamente con el triunfo de Michelle Bachelet. Estos gobiernos centroizquierdistas, han podido, de alguna manera, equilibrar sus políticas sociales en un contexto democrático y neoliberal. Podemos afirmar que son una especie de «socialismo liberal», en donde el discurso es social demócrata o socialista democrático pero la política económica es neoliberal, situación que establece una clara diferencia con la orientación populista-nacionalista. Otra diferencia está también en los cambios de las constituciones en Venezuela, Ecuador y Bolivia, con miras a legitimar y fundar una «nueva sociedad» que sus gobiernos dicen representar.

La crisis del Sistema de partidos en algunos países de la región, la poca eficacia del Estado, ahora con un poder más disminuido por la desestatización debido al proceso de privatización, los altos índices de corrupción en la administración pública y de algunas dirigencias políticas, altos índices de pobreza con su consecuente concentración de la riqueza, la marginación y la exclusión, que no es solo económica sino política y social, son las principales causas que jaquean el sistema democrático en América Latina; reforzando de esta manera discursos autoritarios y liderazgos caudillistas. A ello debe agregarse la descomposición de la unidad estatal y nacional

muy notoria en Bolivia en menor medida en Ecuador y con signos manifiestos en la región andina peruana. «La percepción de que la democracia no se hizo acompañar por el desarrollo económico y por la producción de bienes públicos destinados a todos, genera el temor en el Continente sudamericano, de que el electorado tiende a prestigiar liderazgos carismáticos y populistas, de derecha o de izquierda. En suma, ese escenario de crisis económica y social ha producido escenarios bastante desalentadores: desorden social, caos político y consiguiente crisis de gobernabilidad; apoyo a salidas autoritarias, resurgimiento de un nuevo protagonismo militar; elección de líderes populistas con poca o ninguna experiencia de poder, creciente influencia del crimen organizado sobre las instituciones —politico partidarias entre otras», describe así la realidad latinoamericana María Celina D'Araujo, en su ensayo Transición Democrática y Crisis Social en Brasil y América Latina (pág.179).

Es cierto, se está produciendo una crisis de legitimidad de la democracia representativa, pero esta crisis es a la vez el resultado de una expresión democrática de quienes nunca han podido superar su condición económica y social. Son amplios sectores excluidos y marginados que no tuvieron y que todavía no tienen acceso a la riqueza, el poder, la educación, salud, vivienda, y a un empleo digno.

Lo que sucede es que a pesar de que ha habido avances democráticos importantes todavía el poder político se concentra en un juego de intereses de élites políticas y económicas que se resisten a ampliar los espacios democráticos es decir, asumir y aceptar que otros sectores de nuestras sociedades deben participar más en las decisiones políticas. Por ello es fundamental «democratizar la democracia» en América Latina, creando condiciones para una representación más real de los diversos sectores sociales y abriendo canales para una mayor expresión y participación política de la sociedad civil. Existe una pugna en ese sentido entre aquellos que desean mantener el orden político y económico existente y aquellos otros, «que tocan la puerta» para ser actores en los procesos políticos y en las políticas económicas y sociales. En otros términos como dice Elías Díaz, que «la libertad-participación sustituya a la libertad-alineación del capitalismo liberal» (En Alarcón Gilmer. Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia, pág. 346).

Señala Augusto Ramirez Ocampo, Coordinador del Proyecto para los Países Andinos en su trabajo «Desarrollo Democrático en América Latina»; «la sociedad civil empieza a hacer repensar el modelo de toma de decisiones. Por ello, realmente no creo que pueda seguir pensándose en establecer una vivisección entre la democracia representativa y la democracia participativa, tampoco creo que debe seguirse viendo como enemigos a los partidos políticos y a la sociedad civil, ambos, dentro de una democracia moderna, tienen un importante rol que desempeñar» (pág. 286).

Deben hacerse entonces cambios importantes sin afectar las conquistas democráticas logradas, desde que la región inició este proceso hace 28 años. Debe construirse además de la democracia representativa, que incluso requiere cambios para que los ciudadanos sientan que sus representantes realmente los representan, una democracia inclusiva que reconozca e incorpore a los que están excluidos del poder y la riqueza, el reconocimiento de «el otro», como actores políticos y sociales: campesinos pobres, mujeres pobres, minusválidos, homosexuales, indígenas de la amazonía, los andes, Centroamérica, México y el Caribe. Así como los pobres de las urbes latinoamericanas que son millones.

La democracia debe ser transparente, lo que permite no solo información para que los ciudadanos tengan conocimiento de lo que hacen sus autoridades sino que es fundamental en la lucha contra la corrupción. Una democracia participativa que promueva las instituciones de la democracia directa a través de más consultas populares, iniciativas populares, remoción de funcionarios, revocatoria de autoridades, rendimiento de cuentas, cabildos abiertos, audiencias vecinales y comunales, así como una red de democracia telemática que no se limite al voto electrónico sino que contribuya a la interacción y a la deliberación, vía la conectividad, entre la ciudadanía y las autoridades.

Las democracias latinoamericanas deben orientarse en esta dirección. Buscar un consenso en este sentido, más allá del lógico discurso que existe para poner en práctica las metodologías necesarias, para que la democracia sea más funcional y eficiente, en el marco de los principios éticos que deben primar en las decisiones políticas, en las relaciones económicas y sociales. En fin una democracia que empodere al pueblo pero con estados eficientes y modernos que no sean percibidos como enemigos del pueblo y al servicio de los ricos, estados de servicio con autonomía suficiente para superar el rentismo, el mercantilismo, y el clientelismo, estados y gobiernos que no estén sometidos a intereses de grupos de poder, que garanticen la seguridad, la libertad, la justicia y el progreso.

Dos factores podrían contribuir a este necesario cambio uno es objetivo y el otro subjetivo. El primero está relacionado con la toma de conciencia popular que la democracia es un valor y que es mejor progresar en este sistema político, toma de conciencia fundamental que puede crear las condiciones para una presión popular que exija mayor democracia. La segunda que las élites políticas estén dispuestas a realizar el cambio. «Esta democratización de la democracia», con las características antes señaladas, contribuiría a modificar la cultura autoritaria, el caudillismo, el clientelismo y el elitismo. En cuanto al denominado «militarismo», calificativo genérico que se le otorga a los militares en el gobierno, por lo que viene sucediendo hasta ahora, al menos en sus manifestaciones tradicionales, habría sido superado.

Los gobiernos democráticos latinoamericanos tienen actualmente problemas de gobernabilidad. No pueden conducir y reaccionar eficazmente ante los resultados derivados al proceso de mundialización, que son dinámicos y complejos. Han perdido poder frente a las corporaciones transnacionales. Ello explica, como afirma Olivie Dollfus, que el estado está desbordado, no solo por el desplazamiento del capital en el contexto internacional, sino frente a otros grupos de poder internacional como, por ejemplo las ONG, que han ocupado un campo antes reservado solo para el Estado, en el marco de una soberanía territorial. Hoy en día, debido a los cambios tecnológicos, sobre todo por el surgimiento de Internet y otras técnicas de comunicación, el poder radica en el control de redes y no del territorio. Ello explica porque en gran parte los estados han perdido soberanía en sus propios espacios territoriales, porque las relaciones de poder a través de internet son reticulares y no verticales. En consecuencia quienes controlan estas redes son los que realmente tienen poder y eso sucede en la actualidad, porque son las entidades privadas las que tienen el control, entonces por ello establecen e imponen sus reglas del juego, que son las de mercado y su concepción del mundo, su ideología, para justificar intereses económicos, políticos y culturales.

«Ces concurrences, debordements, érosions, et attaques des pourvoirs etatiques interviennent aussi parce que, pour gouverner dans le monde et pour assurer son pouvoir, il vaut mieux controler des reseaux plutot que des territoires. Le controle par le reseau est moins couteux que celui par le territoire; il est plus «ciblé» et ne s'encombre pas de la gestion des hommes et de la regulation de leurs rapports». (La Mondialization pág. 106)¹

Si esta situación constituye un problema para estados sólidos y con presencia en sus sociedades, lo es más aún para estados débiles, como son los estados latinoamericanos, desbordados no solo por los grupos de poder en la mundialización, sino por los grupos de contrapoder que surgen y actúan en este novedoso contexto.

Indica Francisco Durand que «la vuelta posterior al norte neoliberal no es un accidente; hay, mal que bien una mayor aceptación de ese camino. Varias son las razones que desde el lado del mercado y del estado han ampliado gradualmente el apoyo a dicha

¹ «Esas competencias, excesos, erosiones y ataques de los poderes estatales intervienen también, porque para gobernar en el mundo y para asegurar su poder, vale más controlar las redes que los territorios. El control por medio de la red es menos costoso que aquel del territorio. Este es más «dirigido» y no se entorpece de la gestión de los hombres ni de la regulación de sus relaciones».

orientación macroeconómica. Primero, se ha transformado la estructura del poder económico, habiéndose redibujado un mapa de poder que fortalece al sector privado volcado hacia el mercado mundial. Segundo, la estructura económica gira cada vez con mayor fuerza en torno a capitales extranjeros que desplazan a los nacionales. Tercero, el estado se ha hecho más dependiente del capital financiero y productivo, es decir, su autonomía se ha estrechado considerablemente. Cuarto, se hace más intensa la gravitación del bloque de fuerzas de la globalización en la definición de políticas publicas y en la difusión de una cultura capitalista. Las elites tienden mayormente a apoyarla, pero las masas no en la misma medida; tampoco la clase media, siempre ambivalente». (Pág. 532).

Se ha producido un desplazamiento del centro de poder, el estado ha quedado debilitado frente al poder de las grandes corporaciones transnacionales y de otras instituciones de la sociedad civil, como los movimientos de protesta y el cuestionamiento del neoliberalismo y la mundialización o globalización. Movimientos de tipo político, cultural, étnico y el desplazamiento de pueblos por diversas razones. Por eso el problema que tienen algunos estados para reordenar los procesos migratorios. Que como se comenta en el Perú con ironía lo que más exportamos no son minerales, espárragos o harina de pescado, sino peruanos. Irónica apreciación que puede aplicarse a toda América Latina y que expresa una realidad social cada vez más constante y permanente.

Cuando el centro de la toma de decisiones, los mecanismos e instrumentos para ejercer el poder, se están desplazando a otros grupos de la sociedad civil, además del efecto de la mundialización sobre los estados nación, sucede que, desde su interior, surgen movimientos nacionales de tipo étnico-cultural que también erosiona y pone en jaque al Estado, éste se encuentra agredido por nuevos fenómenos externos e internos. Es esta doble presión, la foránea y la local, una de las principales razones de la crisis del estado nación en América Latina, más en unos países que en otros, situación que pone en conflicto los valores democráticos con los intereses del capital y los nacionalismos, generalmente autoritarios y populistas.

La gobernabilidad está amenazada debido a que los recursos con que cuenta el Estado para afrontar los retos que plantea la mundialización, son débiles y obsoletos.

La democracia en América Latina se encuentra aprisionada por los efectos negativos del consenso de Washington, porque el crecimiento económico sigue siendo desigual, entonces no puede haber desarrollo humano integral, porque un desarrollo desigual no es desarrollo sino subdesarrollo. Pero igualmente por movimientos políticos violentistas como el terrorismo y el narcotráfico, o alianzas entre ambos conocida

como narcoterrorismo. Además latinoamérica está sufriendo las consecuencias de un proceso de integración, que cada vez más está agudizando nuestras diferencias que afirmando nuestras semejanzas, hecho por lo demás explicable porque nuestro subcontinente, para utilizar una frase de Santo Tomás es la «unidad en la diferencia». Este hecho afecta lo que muchos consideramos una unidad natural, pero lo cierto es que las diferencias son cada vez más marcadas en relación a intereses políticos, ideológicos, y económicos. Por eso nuestro proceso de integración requiere de una racionalidad que se defina consensualmente y tiene que ser necesariamente democrático. América Latina unida es un mito, pero como sucede en la historia los mitos pueden romperse, no obstante todavía hay que superar muchos prejuicios. Y si de prejuicio se trata, en América Latina se ha producido un proceso de desideologización, que en el fondo es una ideología, es la ideología sin ideología, es la ideología de la justificación de las creencias neoliberales, como únicas, absolutas e incuestionables, bajo la apariencia de que son científicas, en consecuencia «verdaderas», por ello no pueden ser materia de crítica. ¿Si son verdaderas para qué criticarlas?. Esta es la nueva ideología de la desideologización que en esencia encumbre los intereses de poder de grupos económicos y de gobiernos que responden a estos grupos.

América Latina no es ajena al pensamiento único, pero tampoco lo es respecto a la critica de este pensamiento que deforma la realidad y establece una concepción del mundo que colisiona con los valores democráticos y los pone en un serio peligro. «En tales circunstancias, las políticas de «liberización» del mercado no hacen sino entregar sectores enteros de la economía a las corporaciones monopólicas, cuyo comportamiento se hizo cada vez más obvio en la última crisis «ética» del mercado accionariado de los Estados Unidos», diceTheotonio dos Santos (Pág. 487).

Cuando hablamos de los retos de la democracia en América Latina y los relacionamos con la gobernanza en el Continente y a nivel mundial, debemos tener en cuenta, salvo la excepción de Costa Rica, que desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial la política ha oscilado entre el liberalismo democrático y autoritario y el populismo también democrático y autoritario. Esta oscilación ha causado brechas profundas en nuestras sociedades y aunque explica las contradicciones y los conflictos existentes, es el factor principal de cíclicas crisis políticas.

Hay pues tres América Latina. Una moderna, occidental y capitalista. Otra tradicional, autóctona y semi occidentalizada. Una tercera que es consecuencia de la dependencia y dominación, porque el poder económico y político está concentrado en las burguesías nacionales en alianza con las grandes corporaciones transnacionales. Los pocos intentos por superar esta situación a través de gobiernos democráticos con orientación social y con una presencia relativamente autónoma del Estado y de los movi-

mientos populares democráticos, fue la democracia uruguaya antes del golpe de estado en 1973, los gobiernos de Jacobo Arbens en Guatemala y Joao Goulard en Brasil y la democracia chilena, sobre todo en los años 60 hasta el gobierno de Salvador Allende, que fue ferozmente derrocado por el golpe de Augusto Pinochet. En la actualidad está democracia que busca un equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo social, ha resurgido en Chile y en Uruguay, y se mantiene en Costa Rica.

Diversos intentos por construir una política democrática, independiente de grupos de poder nacionales e internacionales con auténtica participación del pueblo y una burguesía vinculada a los intereses nacionales y de la región, fueron brutalmente reprimidos incluso con la anuencia de gobiernos norteamericanos, y no es que no se haya intentado salir de esta especie de «emprisse d'estructuré», de «agarro estructural», porque existen esfuerzos para profundizar y mejorar la democracia con todo lo que ella implica como cultura, civilización y forma de gobierno, pero falta averiguar empíricamente si ahora las condiciones están dadas para que esta alternativa se produzca, si existen en el Continente los recursos no solo políticos, económicos, sociales y culturales, sino la ideología, es decir, la creencia popular que la opción y la respuesta a los actuales problemas estructurales y coyunturales radica en la democracia, sobre todo en su ampliación y profundización.

Si esta creencia fuera aceptada por la mayoría de los latinoamericanos se habrá legitimado. Por ciertas reacciones y demandas populares que se han manifestado en los últimos años no estamos tan lejos de ella pero también, como se ha señalado, existen dificultades para que se consolide, porque todavía se mantienen algunas condiciones objetivas que juegan a favor de la dicotomía liberalismo, ahora en su versión neoliberal, populismo de corte nacionalista.

La creencia de que a través de la democracia se pueden superar problemas, situaciones y prejuicios, tanto estructurales como coyunturales, contribuirá a que en América Latina se pueda definitivamente consolidar un Estado de Bienestar, una democracia social. Una autentica economía social de mercado y una sociedad de bienestar con pleno desarrollo humano. Esta sería una respuesta contundente al capitalismo salvaje y deshumanizado, y al populismo nacionalista y autoritario, que con sus devaneos históricos son los causantes de sucesivas crisis que afectan seriamente la gobernanza en la región y profundizan conflictos que se reproducen, debido a la exclusión y a la marginación política, económica, social y cultural.

En fin una sociedad en donde se valore al ser humano sobre el dinero y el poder, en que su ejercicio y disfrute, como ha sucedido y sucede en muchos casos, no sea arbitrario y asimétrico.